

Del taco al pacto

Juan Antonio Isla Estrada

- La crisis del campo mexicano otra vez a debate.
- Factores que profundizan la crisis y propuestas de solución posibles.
- El fracaso de las políticas neoliberales tocó fondo.

La alarma desatada la semana anterior por el alza a la tortilla provocada por el aumento de su insumo básico, el maíz, ha prendido un foco de alerta al gobierno federal sobre las políticas equivocadas e ineficientes que se han venido aplicando al sector agropecuario en nuestro país durante las últimas décadas. Este es el momento de valorar las alternativas para poner remedio a la crisis del campo. De un escándalo provocado por especuladores que han almacenado maíz ante su alta demanda por el mercado internacional (para su aprovechamiento como un hidrocarburo alternativo) y las medidas de un gobierno asustado por la presión, se debe sacar una solución de fondo que vaya poniendo remedio a un sector abandonado de nuestra economía.

Las recurrentes crisis económicas de México han tenido su repercusión en el campo, pero lo que es la crisis del campo tiene su propia historia y una complicada madeja elaborada por círculos viciosos, ineptitudes oficiales y políticas económicas de alcance global. El campo mexicano ha enfrentado un largo periodo de decaimiento de por lo menos 30 años. La crisis actual del campo mexicano encuentra su origen más reciente en las políticas de ajuste estructural que el país experimentó a partir de 1983 y que se revelan en la transformación profunda del modelo de desarrollo económico; los procesos de ajuste y reformas estructurales determinaron una política económica cuyo objetivo era pasar de una economía protegida y orientada al mercado interno, hacia una economía abierta integrada al mercado globalizado. Las crisis de la economía en 1982 y 1994, con su cauda de devaluación, inflación y endeudamiento profundizaron la crisis agrícola.

Sin remontarnos hasta las controvertidas iniciativas de los gobiernos de mediados del siglo XX y los discutibles efectos del reparto agrario promovido por Lázaro Cárdenas, centraremos nuestro análisis en las circunstancias de los últimos veinticinco años. Así, la crisis económica de 1982 fue determinante en transformaciones políticas que originaron la llegada de una nueva clase política al gobierno federal, encabezada por la generación de los llamados tecnócratas. A su vez esta nueva dirigencia venía con una estrategia de desarrollo totalmente diferente a la que el país había seguido hasta ese año. La nueva propuesta se basaba en la apertura económica y a limitar la intervención del Estado. En aras de una política modernizadora y en la búsqueda de una mayor eficiencia económica se modificó el artículo 27 constitucional y con ello se transformó el modo de posesión y trabajo sobre la tierra.

Los cambios promovidos por el régimen salinista tenían como fin rescatar la autosuficiencia alimentaria perdida en los años ochenta, y en donde se presentaron cifras deficitarias recurrentes en la balanza comercial del sector. Lo que intentaban las políticas adoptadas a partir de la reforma constitucional era que se alcanzara la reconversión de cultivos. Al paso del tiempo se puede asegurar que la propuesta salinista no funcionó socialmente, pero la apertura y liberalización económica ha sido un proceso continuo.

Dicho proceso propició que muchos productores no lograran adaptarse, por no poder reducir sus costos y alcanzar las tan aclamadas economías de escala y tuvieran que salir del mercado. La balanza comercial agropecuaria muestra el proceso de reconversión de cultivos del campo mexicano y la dependencia en granos y oleaginosas a partir de 1990.

Han sido frecuentes los intentos fracasados del gobierno federal que insiste en la reconversión del campo mexicano a fin de insertarlo en los mercados mundiales y aprovechar las ventajas comparativas de ciertos productos. Las propuestas para el desarrollo que ha dominado señala a las actividades primarias como un sector atrasado tecnológicamente y por ello hay migración a otros sectores económicos y la expulsión de mano de obra hacia más allá de la frontera norte.

Según los especialistas la crisis del campo mexicano está en medio de tres problemas que son los grandes males del país: la desigualdad, la pobreza y marginación y la exclusión.

- En el modelo de desarrollo económico impulsado, el campo rural y dentro de éste el sector agropecuario, no ha sido, ni es considerado como un eje estratégico de desarrollo.
- - Las reformas jurídicas, institucionales, económicas y de políticas, cuya finalidad es permitir la intervención del mercado y los agentes privados sin regulaciones estatales.
- - Se apuesta a las fuerzas del mercado como directriz y motor.
- - El TLCAN ha provocado la pérdida de la rentabilidad económica y ha vulnerado la frágil planta productiva agropecuaria.
- - Con ese tratado se profundiza la dependencia alimentaria y los campesinos y pequeños productores somos los grandes perdedores, sólo han ganado las grandes corporaciones transnacionales que dominan el mercado de granos, semillas y otros productores agropecuarios y sus derivados.
-

Por otro lado, el sector agropecuario ha mostrado ser altamente sensible a los cambios macroeconómicos, en parte debido a los riesgos inherentes que le hacen depender de condiciones climatológicas y naturales; pero sobre todo, debido a las limitaciones estructurales para reconvertir la producción en el corto plazo; a las restricciones de infraestructura y limitaciones del desarrollo agroindustrial y también, debido al control que

ejercen los países desarrollados y las empresas transnacionales sobre la mejora tecnológica, los precios y los mercados internacionales.

La política agropecuaria para la modernización del campo se ha centrado en el mercado como motor del desarrollo excluyendo casi en su totalidad la regulación o participación estatal. Esta visión considera que la baja contribución del sector en el PIB nacional y la PEA dedicada a la agricultura son variables que pueden funcionar positivamente al alcanzar mayores niveles de desarrollo urbano industrial, subordinado al sector agropecuario (Fuente: Alberto Gómez Flores, Coordinador Ejecutivo del Congreso Agrario Permanente (CAP) y Coordinador Ejecutivo Nacional de la UNORCA

Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, ante la Comisión de la Reforma Agraria de la LVIII Legislatura).

Según la misma UNORCA y algunos documentos de especialistas consultados, otros factores que han contribuido a profundizar la crisis en el campo son: los ajustes fiscales que han implicado la desaparición o reducción de la mayor parte de los programas estatales de apoyo a la agricultura, acompañado de la drástica disminución de los subsidios; la disminución real del gasto público al desarrollo agropecuario; el aumento de las importaciones de productos agrícolas que han crecido hasta en un 400%; el desplome del crédito al sector agropecuario; la disminución del empleo permanente en el sector primario que ha tenido su origen en la drástica caída de la rentabilidad del campo.

En conclusión: los paradigmas neoliberales están llevando a la catástrofe a la agricultura y a las políticas alimentarias. El fracaso tocó fondo con un Secretario de Agricultura en el sexenio pasado que basó su estrategia en privilegiar a un sector de empresarios exportadores encabezados por él mismo.

Ha llegado la hora de abrir un gran debate nacional para llegar a un gran acuerdo que involucre a todos los actores rurales, que permita la reorganización económica de la sociedad rural, la reflexión y el consenso amplio que reconozca e incluya las diferencias productivas, económicas, políticas y culturales.

Se requiere la construcción de un acuerdo colectivo entre el gobierno, los agentes de los mercados y los productores rurales a través de una profunda transformación de las instituciones, el establecimiento de normas y reglas claras que garanticen la verdadera competencia y el funcionamiento apropiado de los mercados, la redefinición del nuevo papel y el carácter de la intervención estatal, así como el papel y la mayor participación de la sociedad rural. Y se requiere, fundamentalmente, de una mayor inyección de recursos al campo, como lo hacen en todos los países desarrollados. Pero dicha inversión tendrá que ser una verdadera promoción económica y productiva de la agricultura comercial y el apoyo subsidiario a la agricultura campesina y a las regiones marginadas y de extrema pobreza.

En medio del debate de la semana pasada una voz me llamó la atención: la del Secretario de Agricultura del gobierno del estado de Querétaro, Héctor Samuel Lugo Chávez, que explicaba con claridad que el fenómeno del alza de la tortilla era un montaje de los especuladores y exigía una mayor atención de la Secretaría de Economía del gobierno federal. La respuesta, sin embargo, que dio Eduardo Sojo ha sido torpe y apresurada: anunció la importación de cientos de miles de toneladas de maíz para cubrir la demanda. Se le olvida que México es el cuarto productor mundial de maíz, con 22 millones de toneladas por ciclo agrícola (a pesar de los bajos rendimientos con 2.5 toneladas por hectárea, mientras en Estados Unidos es de ocho a 12 toneladas). No se dio cuenta que las bodegas de los grandes y medianos productores estaban repletas de cientos de miles de toneladas de maíz, esperando que las adquieran para convertirlas en etanol (utilizado como combustible para los automóviles o como añadido a la gasolina).

Urge pues que pasemos de la crisis del taco al gran pacto en el que participen desde el gobierno federal y los gobiernos estatales hasta los pequeños productores y los grandes campesinos. Y si no... que la desnutrición se los demande.

<http://www.RadioAyohui.com>